

Prisión Preventiva Contra Tres Exfuncionarios en Argentina

Isabelita Regresó Ayer a la Casa Rosada; Continúan las Huelgas

BUENOS AIRES, 26 de noviembre (AFP-UPI).— La justicia federal dictó hoy la prisión preventiva a 3 exfuncionarios del gobierno argentino, por falsificación de documentos y estafa.

La medida se aplicó a Rodolfo Roballos, exministro de Bienestar Social, al jefe de Transportes, Eduardo Ranieri, y al jefe de Compras de esa cartera, Alfredo Paszke, a cada uno de los cuales se embargaron bienes por 3 millones de pesos (500 mil pesos mexicanos).

A los 3 exfuncionarios se les encontró culpables de participar en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, falsificación de documentos y estafa a una administración nacional.

Roballos, Ranieri y Paszke, que fueron encarcelados hace 2 meses, desde que se inició la investigación judicial, cometieron irregularidades en la contratación de transportes dentro del área de bienestar social, mediante adjudicaciones a una empresa perteneciente a Pedro Eladio Vázquez, exsecretario de Deportes y Turismo, su hermano Demetrio Vázquez, exsecretario privado de José López Rega, y el padre de ambos, Horacio Vázquez.

Demetrio Vázquez se encuentra prófugo y la policía ordenó su captura, al igual que Carlos Alejandro Villone, exministro de Bienestar Social, acusados también de participar en los delitos públicos.

Por otra parte, la presidenta María Estela Martínez, de Perón retornó hoy a la Casa de Gobierno, tras una ausencia de 26 días, para afrontar un nuevo brote de agitación sindical, que volvió a paralizar la industria automotriz.

La viuda del general Juan D. Perón reanudó su actividad en la sede gubernamental, luego que políticos opositores denunciaron insistentemente un vacío de poder.

La mandataria, de 44 años, estuvo hospitalizada 11 días a principios de mes, por lo que oficialmente fue descrito como una grave afección a la vesícula biliar, tras lo cual continuó recluida en la residencia presidencial, en la zona norte del gran Buenos Aires.

El retorno de la jefa de Estado a la Casa de Gobierno coincidió con un nuevo brote de agitación sindical, que abarcó a los obreros mecánicos, trabajadores de la empresa estatal del gas, ferroviarios y empleados del correo.

Los 120 mil obreros del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), cumplieron hoy un nuevo paro nacional, el segundo en 3 días, y unos 30 mil de ellos reunidos en asamblea en un estadio de boxeo de esta capital, resolvieron declararse en huelga por tiempo indeterminado, en protesta contra una resolución oficial, que virtualmente significa la disolución del gremio.

Al término de la asamblea, los obreros de SMATA se dirigieron al Congreso, distante unas 20 cuadras, para expresar su protesta ante el Parlamento.

La resolución, un laudo arbitral del ministerio de Trabajo, dispone que los afiliados de SMATA deben encuadrarse dentro de la poderosa Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el principal gremio del país, con 450 mil miembros.

La UOM está encabezada por el máximo líder sindical peronista, Lorenzo Miguel, el más allegado a la Presidenta.

Miguel dijo hoy que "el laudo debe ser cumplido tal como lo disponen las autoridades laborales", por lo que no se vislumbraba una solución al problema.

En los otros conflictos laborales, los 11 mil trabajadores de la compañía estatal del gas cumplieron hoy su segundo día de paro nacional en demanda de aumentos salariales, en tanto que otros empleados públicos, como ferroviarios y agentes del correo, realizaban otras medidas de fuerza por igual exigencia.

Varios gremios de empleados estatales reclaman un aumento general de 1,500 pesos (unos 263 pesos mexicanos), mensuales, que el gobierno otorgó a los trabajadores privados y a los de algunas empresas públicas, a partir del 1º de noviembre.